RESOLUCIÓN (Expte 516/01, MERCACÓRDOBA)

Pleno

Excmos. Sres.:

Solana González, Presidente
Huerta Trolèz, Vicepresidente
Castañeda Boniche, Vocal
Pascual y Vicente, Vocal
Comenge Puig, Vocal
Martínez Arévalo, Vocal
Franch Menéu, Vocal
Muriel Alonso, Vocal
del Cacho Frago, Vocal

En Madrid, a 3 de abril del año 2002

El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, el Tribunal, TDC), con la composición expresada al margen y siendo Ponente el Vocal D. José Juan Franch Menéu, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 516/01 (1674/97 del Servicio de Defensa de la Competencia, en adelante, el Servicio), iniciado por denuncia presentada por D. Antonio Burgos Viso, Presidente de la Asociación de Minoristas y Detallistas de Pescado de Córdoba y Provincia contra la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor) y contra Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, S.A. (Mercacórdoba) por supuestas conductas prohibidas por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), consistentes en haber modificado e impuesto de forma unilateral el sistema de facturación y pago que tradicionalmente se venía realizando, por otro consistente en la creación de un sistema centralizado por ordenador con tarjeta magnética individualizada para cada minorista. Se resuelve también sobre la solicitud de autorización singular (expediente número 1982/99 del Servicio) para la puesta en funcionamiento de dicho sistema de facturación y pago que fue acumulada a su expediente sancionador 1674/97.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El día 4 de agosto de 1997 se recibió en el Servicio un escrito de D. Antonio Burgos Viso, Presidente de la Asociación de Minoristas y Detallistas de Pescado de Córdoba y Provincia en el que presentaba denuncia contra la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor) y contra Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba, S.A. (Mercacórdoba) por supuestas conductas prohibidas por la LDC, consistentes en haber modificado e impuesto de forma unilateral el sistema de facturación y pago que tradicionalmente se venía realizando al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/96, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía y en la forma pactada por cada minorista con las respectivas empresas mayoristas, por otro consistente en la creación de un sistema centralizado por ordenador con tarjeta magnética individualizada para cada minorista, negando, además, la compra a los minoristas que por desacuerdo con el nuevo sistema implantado no habían accedido a la nueva tarjeta. Dicho acuerdo de Mapecor para poner en funcionamiento un sistema informático de facturación y cobro en el Mercado de Pescado de Mercacórdoba restringiría la libertad en la fijación de las condiciones comerciales.
2. Por Providencia de fecha 12 de septiembre de 1997, el Director del Servicio acordó la admisión a trámite de la denuncia y la incoación de expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en los artículos 1 y 6 de la LDC .
3. El Servicio, después de realizar distintas actuaciones e incorporando nueva documentación al expediente, formuló, por Providencia de fecha 22 de febrero de 1999, el Pliego de Concreción de Hechos.
 - 3.1 En el mismo se consideran acreditados, entre otros menos relevantes, los siguientes hechos:

(...)

"5- Funcionamiento del Sistema Informático Centralizado de Facturación y Cobro:

- En cada puesto de venta de lo mayoristas existe un ordenador conectado a un servidor de una red informática, al que también está conectada la oficina de cobro.

- Todo comprador debe estar en posesión de una tarjeta magnética que identifica su número de cliente. La "tarjeta de comprador" puede ser provisional o definitiva, con unos requisitos preestablecidos para obtenerla.

- En cada operación de compra-venta que se registra en el ordenador del mayorista se emite la factura correspondiente, para ello es imprescindible pasar la tarjeta del comprador por el lector de tarjetas del ordenador del mayorista. En el mismo momento se envía al ordenador de la Oficina de Cobro el importe total de la factura, que pasa a formar parte del saldo pendiente del comprador.

- En el caso de que el comprador tenga facturas pendientes de pago de más de tres días, el sistema informático no admite la operación, por lo que no emite factura el ordenador.

- La factura es imprescindible para sacar el pescado de la nave.

- Todos los pagos de las facturas se realizan en la Oficina de Cobro y pueden pagarse desde el mismo momento de su emisión. El proyecto inicial atribuye las funciones de la Oficina de Cobros a la entidad bancaria CAJASUR.

6. - Condiciones comerciales y plazos de pago. El nuevo sistema de gestión de la facturación y cobro en MERCACÓRDOBA ha supuesto:

- La necesidad ineludible para ser comprador de estar en posesión de la tarjeta magnética de identificación, bien sea provisional o definitiva.

- La facturación inmediata y mecanizada de todas las ventas.

- El pago centralizado de todas las facturas en la Oficina de Cobros.

- *Unificación de los plazos de pago. Los compradores pueden aplazar el pago hasta tres días hábiles desde la fecha de la venta.*

- *Control de la morosidad. Al realizar una venta, el ordenador del mayorista no emite la factura y, por lo tanto, no puede llevarse a cabo la venta si el comprador tiene facturas pendientes de pago de más de tres días hábiles.*

El mayorista puede obtener del sistema informático las facturas pendientes de pago de sus clientes, pero no las de las de las facturas de los demás mayoristas.

- *El sistema informático está preparado para el pago de facturas completas, por orden de antigüedad.*

- *El sistema tiene incorporado un límite de crédito para cada cliente. En función de las compras habituales de cada cliente, los mayoristas han fijado los siguientes límites de crédito:*

- . Hasta 250.000 ptas. de crédito*
- . Hasta 500.000 ptas. de crédito.*
- . Hasta 1.000.000 ptas. de crédito*

El crédito máximo de cada minorista, para el pago aplazado en tres días, es fijado por los mayoristas de acuerdo con las compras medias realizadas diariamente por éste a todos ellos desde que está en el mercado.

El ordenador del mayorista, para emitir factura, comprueba que el minorista cumple las condiciones de pago, no solo en plazo, sino también en límite.

- *En el proyecto inicial, estaba previsto que los "compradores nuevos", para el pago aplazado, contaran con fianza o aval.*

7. - El Sistema Informático de Facturación y Cobro del Mercado de Pescados entró en servicio el día 14 de junio de 1.997, sin que hasta la fecha haya comenzado a operar CAJASUR. MAPECOR ha subcontratado provisionalmente a MERCACÓRDOBA la gestión del cobro.

3.2. El Servicio, en dicho Pliego, efectúa la siguiente valoración jurídica:

1.- *El art. 1 de la Ley 16/89, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, entre otros, en particular, los que consistan en: a) la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.*

2.- *El Sistema Informático de Facturación y Cobro del Mercado de Pescados en MERCACÓRDOBA, es un acuerdo adoptado por los mayoristas asociados a MAPECOR para la fijación de condiciones comerciales, en particular en lo referente a: Plazos de pago; Límites de crédito; Exigencia de fianza o aval; Negativa de venta a los morosos; Pago de facturas por orden de antigüedad.*

3.- *A su vez, dicho Sistema implica un acuerdo de intercambio de información entre competidores, referida a morosidad y, lo que es más significativo, referida a volumen de ventas de cada mayorista a cada uno de sus compradores, con objeto de fijar el crédito disponible de cada uno de ellos.*

4.- *La entidad MERCACÓRDOBA, cuya responsabilidad, como se ha visto anteriormente, es... mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios.. formuló una oferta para llevar a cabo la implantación del "Sistema" y, aceptada ésta, suscribió contrato con cada una de las empresas participantes, por lo que no puede considerársela ajena al diseño, implantación y recomendación de las condiciones comerciales implícitas al citado "Sistema".*

5.- *De lo anteriormente expuesto, se deduce que por parte de MAPECOR y de MERCACÓRDOBA, al implantar el sistema informatizado de facturación y cobro, anteriormente citado, se ha incurrido en prácticas restrictivas de la competencia tipificadas en el art. 1 de la LDC, sin que por parte de ninguno de los interesados se haya solicitado autorización singular para las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 4 de la LDC.*

6.- El mercado afectado por las prácticas objeto del presente expediente es el de la venta al por mayor de pescado en Córdoba y provincia. En dicho mercado tanto MERCACÓRDOBA como MAPECOR, que representa a once de los trece mayoristas que actúan en el mismo, tienen posición de dominio. La imposición, por parte de esta última, de las condiciones comerciales implícitas al nuevo Sistema de Facturación y Cobro a los minoristas que actúan en MERCACÓRDOBA, constituye un abuso de posición de dominio, previsto en el art. 6 de la Ley 16/89.

4. Con fecha de entrada en el Servicio de 20 de abril de 1999, Mapecor solicitó autorización singular para el sistema informático de gestión de la facturación y cobro de las ventas realizadas en el mercado de pescados de Mercacórdoba y, por Providencia del Director del Servicio de 28 de abril de 1999, se admite a trámite dicha solicitud, se incoa expediente bajo el número 1982/99 y se acumula a este sancionador que, en el Servicio, tiene el número 1674/97.
5. A la vista de lo instruido y de las alegaciones formuladas al Pliego de Concreción de Hechos, se propuso el sobreseimiento parcial, en lo referente a las prácticas imputables a Mercacórdoba por Providencia del Instructor de 14 de enero de 2000. Esta propuesta se notificó a los interesados sin que ninguno de ellos formulara objeción al contenido de la misma, por lo que, por Acuerdo del Director del Servicio de 5 de mayo de 2000, se formuló el sobreseimiento parcial del expediente.
6. Declaradas concluidas las actuaciones, la instructora procedió a redactar el Informe previsto en el Art. 37.3 de la ley 16/1989. En dicho Informe, de fecha 19 de marzo de 2001, se efectúa la siguiente calificación:
 - 6.1. En lo que se refiere al expediente sancionador, el Servicio se ratifica, en gran medida, en la valoración llevada a cabo en el Pliego de Concreción de Hechos, ya que en virtud del art. 1 de la Ley 16/89, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, entre otros, en particular, los que consistan en: a) la fijación, de

forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

" En el presente caso, el Sistema Informático de Facturación y Cobro del Mercado de Pescados en MERCACÓRDOBA, es un acuerdo adoptado por los mayorista asociados a MAPECOR, que implica la fijación de condiciones comerciales.

- En lo referente a Plazos de pago, el Servicio entiende que el establecimiento del sistema informático requiera de unas pautas a seguir en las transacciones entre mayorista y minorista, pero dichas pautas deben ser susceptibles de modificación en virtud de la negociación entre ambos. De acuerdo con las alegaciones de MAPECOR (folio 365) en la práctica se está haciendo así, por lo que debería hacerse constar en las normas de funcionamiento del sistema.

- Las mismas alegaciones se han hecho en lo referente a los límites de crédito por lo que debe hacerse extensiva la exigencia de que dicha flexibilidad figure en las citadas normas y en el funcionamiento real del sistema.

- Tanto la exigencia de fianza o aval, como la negativa de venta a los morosos o el pago de facturas por orden de antigüedad, son condiciones inaceptables, ya que limitan la autonomía de cada comerciante para negociar libremente sus condiciones comerciales.

La argumentación sostenida por el denunciado según la cual (folio 391) "...el plazo de pago fijado puede ser modificado por acuerdo entre cada mayorista y cada minorista e, incluso, los mayoristas pueden pagar, por cuenta de los minoristas, las compras que estos han hecho, desbloqueando de este modo el sistema y permitiendo que minoristas que deben facturas de mas de tres días puedan seguir comprando...." confirma la existencia de un acuerdo de negativa de venta a morosos así como de limitación de crédito que solo puede "desbloquearse" en determinadas condiciones.

- A su vez, dicho Sistema implica un acuerdo de intercambio de información entre competidores, referida a morosidad y, lo que es más significativo, referida a volumen de ventas de cada mayorista

a cada uno de sus compradores, con objeto de fijar el crédito disponible de cada uno de ellos.

En consideración a ello, el Servicio efectúa la siguiente propuesta:

"PROPUESTA DE SANCIÓN

El art. 10 de la LDC prevé la imposición de multas por parte del TDC cuando deliberadamente o por negligencia se infrinja lo dispuesto en los arts. 1, 6 y 7 de la misma.

Para fijar la cuantía de las sanciones ha de atenderse a la importancia de la infracción, para lo que ha de tenerse en cuenta una serie de criterios fijados en el art. 10.2 LDC. En este caso, a) en relación con la modalidad de la infracción, se trata de una infracción del art. 1 de la LDC; b) por lo que se refiere a la dimensión del mercado afectado, se trata de la distribución mayorista de pescado en MERCACÓRDOBA; c) en lo referente a los efectos de la restricción de la competencia debe señalarse que las cifras de venta no se vieron afectadas negativamente, sino que la implantación, en determinadas condiciones, del Sistema puede favorecer el funcionamiento del mercado de pescado.; d) en cuanto a la duración de la conducta, como se ha visto a lo largo del expediente, el Sistema no llegó a implantarse, en su totalidad, en las condiciones en que había sido acordado. No obstante lo anterior, este Servicio considera que debe tenerse en cuenta que el Sistema, tras su implantación, fue notificado al Servicio con objeto de su autorización por ese Tribunal. Por todo ello, el Servicio considera que procede la aplicación de lo previsto en el art. 9, de la LDC en lo referente a la intimación por parte de ese Tribunal a MAPECOR.

Teniendo en cuenta las valoraciones anteriores, se PROPONE:

Primero.- Que por el Tribunal de Defensa de la Competencia:

a) Se declare la existencia de una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el art. 1 a) de la Ley 16/89, de Defensa de la Competencia, de la que es responsable MAPECOR, consistente en la implantación de un Sistema informático de facturación y cobro, en el mercado de pescado de MERCACÓRDOBA que traía aparejada la imposición de

condiciones comerciales homogéneas a los minoristas del citado mercado.

b) Se declare que el Sistema informático de facturación y cobro, para el que solicitó autorización singular MAPECOR, es susceptible de autorización al amparo del art. 3 de la Ley 16/89, con las condiciones anteriormente expuestas.

c) Se intime a MAPECOR, para que en lo sucesivo se abstenga de fijar condiciones comerciales homogéneas.

Segundo.- *Se adopten los demás pronunciamientos a que se refiere el artículo 46 de la Ley 16/89 de Defensa de la Competencia.*

- 6.2. En lo que se refiere a la autorización singular, señala que esta solicitud se formuló con carácter cautelar ya que, como textualmente afirman los solicitantes, *“no puede considerarse como un reconocimiento, ni expreso, ni tácito, por mi representada, de la realización de conducta alguna contraria al derecho de defensa de la competencia; se trata, simplemente, de ejercer todos los derechos a su alcance...”* y que, como se desprende del Pliego de Concreción de Hechos y de la valoración jurídica del punto anterior, el Servicio disiente de tal calificación:

El establecimiento de un sistema informático centralizado de facturación y cobro en el mercado de pescado de MERCACORDOBA, en sí, no es restrictivo de la competencia y puede reportar grandes beneficios al funcionamiento general de dicho mercado, pero la articulación del mismo, como se ha podido ver, no es neutra y, en el presente caso, ha implicado prácticas tipificadas en el art.1 de la LDC como restrictivas de la competencia.

El Servicio considera que dicho “sistema” es susceptible de autorización al amparo del art.3 de la LDC, siempre que cumpla determinados requisitos, y que dichos requisitos queden expresamente recogidos en las normas de funcionamiento del mismo”.

7. Mediante Providencia de 6 de abril de 2001 el Tribunal acordó la admisión a trámite del expediente, designa Ponente y decide ponerlo de manifiesto a los interesados para que, en el plazo legal, puedan

formular alegaciones, proponer las pruebas que a su derecho convenga y solicitar la celebración de vista, lo que comunica al Servicio y se notifica a los interesados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 39 y 40.1 LDC.

8. En el trámite de proposición de prueba y vista sólo compareció, en escrito de entrada en el Tribunal 17 de mayo de 2001, la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor), parte denunciada y solicitante de la autorización singular, reiterando su pretensión (ya formulada ante el Servicio) de caducidad del expediente y solicitando que se tuvieran por reproducidos todos los documentos anexos a su escrito y los demás que se habían presentado anteriormente. Entre los documentos aportados se encuentra la nueva versión, adaptada a las sugerencias del Servicio, de las **"Normas de funcionamiento del sistema informático de facturación y cobro centralizado en el mercado de pescados de Mercacórdoba"**

El Tribunal, a la vista de las propuestas, en Auto de fecha 17 de enero del año 2002, resolvió denegar la petición de caducidad del expediente, tener por incorporadas al expediente las pruebas aportadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia y los documentos anexos a su escrito de alegaciones ante el Tribunal con fecha 17 de mayo de 2001. También consideró más oportuno el trámite final de conclusiones no siendo necesaria la celebración de vista.

9. En el trámite de conclusiones, únicamente Mapecor presentó un amplio escrito que tiene fecha de entrada en el Tribunal 8 de febrero de 2002. Resumidamente, reiterando argumentos de escritos anteriores ante el Servicio y el Tribunal, señala:

- 9.1. Que la implantación del sistema tiene su justificación en los Reglamentos de Servicios y de Funcionamiento de Mercacórdoba.

- 9.2. Que no se puede considerar práctica restrictiva de la competencia la implantación de un sistema informático de gestión de la facturación y cobro.

Ello quedó demostrado mediante una certificación del Secretario del Consejo de Administración de MERCACÓRDOBA, S.A., que se adjuntó como documento anexo nº 3 al escrito de alegaciones de esta parte presentado el 17 de mayo de 2001, en la que se certificaba que desde la implantación del Sistema no se había

recibido queja alguna por dicho motivo. Pues bien, tampoco desde esa fecha se ha planteado queja alguna en relación con las condiciones del Sistema que son objeto del presente expediente.

Respecto a los plazos de pago que, si bien el Servicio hablaba de *"una unificación de los plazos de pago. Los compradores pueden aplazar el pago hasta tres días hábiles desde la fecha de la venta"*.

En cuanto a los límites de crédito, el texto actual de dichas normas es el siguiente: *"Las condiciones de pago, especialmente las que se refieren al plazo y al límite de crédito se establecerán libremente por acuerdo individual entre cada mayorista y comprador. De no fijarse previamente, se aplicarán las que siguen, que en cualquier caso pueden modificarse posteriormente"*.

Respecto al intercambio de información entre competidores, que el actual responsable informático del Sistema afirma que *se mantiene la misma información que el sistema ha proporcionado hasta la fecha, información que, en ningún caso, incluye a quién ni cuánto debe un minorista al resto de mayoristas ni el volumen de compras que el minorista realiza"*.

En cuanto a la exigencia de fianza o aval, que a ninguno de los minoristas que compran en el Mercado de Pescados de Mercacórdoba se le ha exigido, para poder comprar, la prestación de ningún aval, fianza o garantía.

Así quedó demostrado en el documento en el que el actual responsable del Servicio Informático del Mercado de Pescado de Mercacórdoba manifiesta que no es necesario aval para que los minoristas puedan comprar a través del Sistema.

En lo referente a la negativa de venta a morosos y pago de facturas por orden de antigüedad, que de todas las alegaciones hechas en el expediente del Servicio, tanto por Mercacórdoba, S.A. como por Mapecor, alegaciones que en ningún momento han sido negadas por los minoristas, se evidencia que no se han producido negativas de venta por parte de ningún mayorista asociado a Mapecor por la morosidad de un determinado minorista, como tampoco por ningún otro motivo derivado de la

implantación del Sistema; muy al contrario, los minoristas han podido seguir comprando, sin ningún problema, en cualquiera de los puestos de los mayoristas asociados a Mapecor y adheridos al Sistema. Y que, en cualquier caso, no hay ninguna norma en el Sistema que obligue al pago de las facturas por orden de antigüedad, por lo que no ha sido necesario modificar el Sistema para adaptarlo a las exigencias del SDC en este punto.

- 9.3. Que la implantación del sistema es una práctica sin trascendencia económica y no puede afectar a la competencia.
- 9.4. Que Mapecor no ha realizado ningún tipo de práctica restrictiva de la competencia merecedora de sanción económica, por lo que la aplicación de los criterios del artículo 10.2 de la LDC debe llevar a la decisión de no imponer sanción alguna a mi representada, pues la infracción que se le atribuye no ha supuesto ningún tipo de restricción a la competencia ni ha afectado, en ninguna medida, al resto de mayoristas, a los minoristas o a los consumidores finales.
- 9.5. Que, en cuanto a la solicitud de autorización singular, hay que tener en cuenta que notificaron la implantación del Sistema y solicitaron, en su día, una autorización singular. El SDC consideró, en su Informe-propuesta, que el Sistema es susceptible de autorización al amparo de la LDC, siempre que cumpla determinados requisitos, y que los mismos queden debidamente reflejados en sus normas de funcionamiento. *"Pues bien, tal como hemos tenido ocasión de demostrar (vid. documento anexo nº 2 al escrito de alegaciones de 17 de mayo de 2001), mi representada no ha tenido inconveniente en clarificar las normas de funcionamiento del Sistema recogiendo las indicaciones del SDC, ya que únicamente ha supuesto trasladar a las normas de funcionamiento lo que es el modo de funcionamiento real del Sistema desde su implantación".*

Suplica por último al Tribunal: *"1º) Que tenga por presentado este escrito y, previo los trámites oportunos, declare la que en el presente expediente no se ha acreditado que Mapecor haya realizado ninguna práctica restrictiva de la competencia prohibida por el artículo 1 de la LDC.*

2º) Subsidiariamente, para el caso de que no atienda la petición anterior, (i) que declare que la conducta de Mapecor no es

merecedora de sanción económica alguna y (ii) que autorice el Sistema de Gestión de Facturación y Cobro para el que Mapecor solicitó autorización mediante escrito de 20 de abril de 1999".

10. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su reunión plenaria del día 20 de marzo de 2002, deliberó sobre este asunto y adoptó la presente Resolución, encargando su redacción al Vocal Ponente.
11. Son interesados:
 - Asociación de Minoristas y Detallistas de Pescado de Córdoba y Provincia.
 - Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba

HECHOS PROBADOS

El Tribunal considera probados los siguientes hechos:

1. Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba S.A., (Mercacórdoba), es una entidad mercantil, gestionada en régimen de Empresa Mixta Municipal, cuyo objeto social es mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices del Gobierno y la promoción, construcción y explotación de los mercados mayoristas de Córdoba, así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los mercados y comodidad de los usuarios.

El Mercado de Pescado en Mercacórdoba es el centro físico de contratación al por mayor de pescado, en el que la oferta la realiza el mayorista, quien puede haberlo comprado en firme en los centros de contratación en origen (Lonjas), o tenerlo en depósito para realizar la venta a comisión y los compradores son los detallistas y, en menor medida, bares, restaurantes, instituciones diversas (hospitales, colegios...) o mayoristas de otros mercados o ciudades sin mercado central.

2. La Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba, en su Asamblea General Ordinaria de 23 de septiembre de 1.995, adoptó por mayoría un acuerdo según el cual se llevaría a cabo la implantación de un Sistema de Gestión y Facturación de Cobros. El órgano de gestión

elegido, entre las ofertas realizadas por Málaga y Mercacórdoba para llevar a cabo la citada implantación, fue Mercacórdoba.

3. En enero de 1.996, se constituye la Asociación de Empresas Mayoristas de Pescado de Córdoba, (Mapecor) que en sus Estatutos define como objeto fundacional: representar, gestionar y defender los intereses profesionales comunes a sus miembros, entre ellos velar por el buen funcionamiento del sistema de gestión de la facturación y cobro informatizado y centralizado en el Mercado de Pescado de Mercacórdoba. Hacen constar expresamente que les mueve a crear tal Asociación el hecho de la defensa de sus intereses profesionales dentro de Mercacórdoba y un mejor control y fiabilidad contable de sus respectivos negocios, así como una disminución de la morosidad en los pagos.
4. Mercacórdoba suscribió contrato de prestación de servicios para la gestión del sistema informático centralizado de facturación y cobro de las ventas diarias con 11 de las 13 empresas mayoristas que actúan en el citado mercado, todas ellas pertenecientes a la Asociación Mapecor.
5. Funcionamiento del Sistema Informático Centralizado de Facturación y Cobro que entró en servicio el 14 de junio de 1997, en base a las normas previstas entonces:
 - En cada puesto de venta de los mayoristas existía un ordenador conectado a un servidor de una red informática, al que también está conectada la oficina de cobro.
 - Todo comprador debe estar en posesión de una tarjeta magnética que identifica su número de cliente. La "tarjeta de comprador" puede ser provisional o definitiva, con unos requisitos preestablecidos para obtenerla.
 - En cada operación de compra-venta que se registra en el ordenador del mayorista se emite la factura correspondiente, para ello es imprescindible pasar la tarjeta del comprador por el lector de tarjetas del ordenador del mayorista. En el mismo momento se envía al ordenador de la Oficina de Cobro el importe total de la factura, que pasa a formar parte del saldo pendiente del comprador.
 - En el caso de que el comprador tenga facturas pendientes de pago de más de tres días, el sistema informático no admite la operación, por lo que no emite factura el ordenador.

- La factura era imprescindible para sacar el pescado de la nave.
- Todos los pagos de las facturas se realizan en la Oficina de Cobro y pueden pagarse desde el mismo momento de su emisión

6. Condiciones comerciales y plazos de pago. Al principio, el sistema de gestión de la facturación y cobro en Mercacórdoba supuso:

- La necesidad en la práctica, para ser comprador con solvencia reconocida y acceder a un trato preferente, de estar en posesión de la "tarjeta magnética" de identificación, bien sea provisional o definitiva.
- La facturación inmediata y mecanizada de las ventas.
- El pago centralizado de todas las facturas en la Oficina de Cobros.
- Cierta unificación de los plazos de pago. Los compradores pueden aplazar el pago hasta tres días hábiles desde la fecha de la venta
- Control de la morosidad. Al realizar una venta, el ordenador del mayorista no emite la factura y, por lo tanto, no puede llevarse a cabo la venta si el comprador tiene facturas pendientes de pago de más de tres días hábiles.

El mayorista puede obtener del sistema informático las facturas pendientes de pago de sus clientes, pero no las de las de las facturas de los demás mayoristas.

- El sistema informático está preparado para el pago de facturas completas, por orden de antigüedad.
- El sistema tiene incorporado un límite de crédito para cada cliente. En función de las compras habituales de cada cliente, los mayoristas han fijado los siguientes límites de crédito:

- . Hasta 250.000 ptas. de crédito
- . Hasta 500.000 ptas. de crédito.
- . Hasta 1.000.000 ptas. de crédito

El crédito máximo de cada minorista, para el pago aplazado en tres días, es fijado por los mayoristas de acuerdo con las compras medias

realizadas diariamente por éste a todos ellos desde que está en el mercado.

El ordenador del mayorista, para emitir factura, comprueba que el minorista cumple las condiciones de pago, no sólo en plazo, sino también en límite.

- En el proyecto inicial, estaba previsto que los "compradores nuevos", para el pago aplazado, contarán con fianza o aval.

- Con todos estos requisitos se transmitía la práctica homogeneización de las condiciones comerciales sin que quedase clara la libertad de contratación unilateral entre los distintos mayoristas y minoristas tanto en el sistema como al margen del mismo.

7. Ha quedado probado, con prueba documental aportada en el trámite ante el Tribunal que desde el 14 de junio de 1997, fecha de entrada en funcionamiento del Sistema Informático de Gestión de Facturación y Cobro del Mercado de Pescados de Mercacórdoba no se ha recibido ningún escrito de queja de los operadores económicos que actúan en el mismo, ya sean éstos mayoristas o minoristas, como consecuencia de la implantación de dicho sistema.

8. Ha quedado también probado:

8.1. que para que los minoristas puedan comprar y pagar sus compras a través del sistema informático, no se exige ningún tipo de aval, fianza o garantía.

8.2. que se han clarificado las siguientes normas de funcionamiento:

8.2.1. Plazos de pago: se mantiene como plazo máximo de pago para considerar "moroso" a un minorista el de 3 días hábiles de venta pero, si un mayorista decide vender a un minorista "moroso", puede solicitar al responsable informático que realice las operaciones precisas para que el sistema permita dicha venta.

8.2.2. Pago de facturas por orden de antigüedad: el sistema permite que el minorista pague aquellas facturas pendientes que desee; en caso de que no manifieste nada en este sentido, el sistema, por defecto, entenderá pagada la más antigua.

8.2.3. Límite de crédito: se mantienen los mismos límites de crédito existentes (250.000, 500.000 y 1.000.000 de pesetas), pero el sistema permite que se puedan establecer otros distintos y que, a petición de cualquier mayorista, los límites se puedan modificar para que los mayoristas que lo deseen puedan vender a los minoristas que hayan rebasado su límite.

8.2.4. Información a la que tienen acceso los mayoristas: se mantiene la misma información que el sistema ha proporcionado hasta la fecha, información que, en ningún caso, incluye a quién ni cuánto debe un minorista al resto de mayoristas ni el volumen de compras que el minorista realiza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Se debe señalar en primer lugar, que, en lo que respecta a la alegación de caducidad, tal y como ya se señaló en el Auto de admisión de prueba y vista de fecha 17 de enero de 2002 y como repetidamente ha señalado este Tribunal, la LDC es una Ley especial en materia de procedimiento, cuyo artículo 50 señala la supletoriedad de la LRJAP y del P.A.C. que establece en el apartado 3 de la Disposición derogatoria que *"se declaran expresamente en vigor las normas, cualesquiera que sea su rango, que regulen procedimientos de las Administraciones Públicas en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley"*. La LDC sigue, pues, plenamente vigente, en lo que a procedimiento se refiere, en todo lo que no se oponga a la LRJAP y del P.A.C., siendo ésta supletoria de aquélla.

Como el procedimiento de la LDC, junto a la protección del interés público, atiende también, en muchos casos, a la salvaguardia de un interés privado, permite la posibilidad de denuncia, siempre que el denunciante tenga un interés legítimo y sea considerado como parte en el expediente, y que la iniciación del mismo pueda ser a instancia de parte interesada.

A su vez, no hay que olvidar que el art. 13.2 LDC establece que *"la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en la*

ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa (por Resolución de este Tribunal) y, en su caso, jurisdiccional".

Por tanto, si los denunciantes y, en general, los interesados quieren ejercitar acciones de resarcimiento, precisan de Resolución de este Tribunal. La caducidad del expediente impediría el ejercicio de las mismas, ocasionándoles un indudable perjuicio.

En este caso, el expediente ha sido iniciado por medio de denuncia y, al tener el denunciante interés legítimo, se le ha considerado interesado en el expediente y el procedimiento es susceptible de producir efectos favorables para los ciudadanos interesados por lo que no le es de aplicación el art. 43.4 de la LRJAP (sólo aplicable *"cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos"*) y, por lo tanto, no lo es el plazo de caducidad establecido en el Reglamento que la desarrolla.

La LDC no establecía, hasta su modificación, plazos máximos de tramitación, sino plazos para los múltiples trámites previstos en ella. Los plazos que la LDC establece para cada uno de los trámites constituyen un equilibrio de garantías para las partes en litigio, asegurando el derecho de contradicción y la igualdad de armas.

A todo ello cabe añadir, tal y como el Tribunal señalaba también en la Resolución de 28 de enero de 1999 (Expte. 399/97, MOBIL) que *"no resulta aplicable el precepto contenido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, pues no ha de incluirse en el procedimiento en materia de defensa de la competencia entre aquéllos a los que se refiere ese precepto. En efecto, el artículo de la Ley procesal administrativa se refiere a los procedimientos que se inician de oficio, es decir, a los procedimientos simplemente sancionadores, mientras que el procedimiento en materia de defensa de la competencia es un procedimiento sancionador que, al mismo tiempo, es susceptible de producir otros efectos para los interesados, por lo que no solamente se inicia de oficio sino también por denuncia de parte interesada (art. 36.1 LDC). En el procedimiento en materia de defensa de la competencia, junto con las sanciones, se realizan otra serie de declaraciones que*

afectan a relaciones que se mueven en el campo jurídico-privado, tales como las relativas a la declaración de acuerdos o conductas prohibidas, y todo ello genera derechos a los interesados más allá de los que son habituales en el campo del derecho administrativo sancionador. Este carácter mixto del procedimiento, que puede terminar con una declaración que resulte declarativa de derechos, constituye un argumento suficiente para no considerar que se le puedan aplicar las normas relativas a la caducidad".

El Tribunal considera, con base en todo lo anteriormente expresado, que no ha caducado este expediente.

Segundo.- En cuanto al expediente sancionador incoado como consecuencia de la denuncia presentada contra la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor) y Mercados Centrales de Córdoba (Mercacórdoba) por haber modificado de forma unilateral el sistema de pago que tradicionalmente se venía realizando al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/96, de 10 de enero del Comercio Interior de Andalucía por otra consistente en la creación de un sistema centralizado por ordenador con tarjeta magnética individualizada para cada minorista, cabe señalar, en primer lugar, que el Servicio elevó el preceptivo Informe-Propuesta al Tribunal en el que se acaba proponiendo:

- Que por el Tribunal de Defensa de la Competencia:

a) Se declare la existencia de una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el art. 1 a) de la Ley 16/89, de Defensa de la Competencia, de la que es responsable MAPECOR, consistente en la implantación de un Sistema informático de facturación y cobro, en el mercado de pescado de MERCACÓRDOBA que traía aparejada la imposición de condiciones comerciales homogéneas a los minoristas del citado mercado.

(...)

c) Se intime a MAPECOR, para que en lo sucesivo se abstenga de fijar condiciones comerciales homogéneas.

Segundo.- Se adopten los demás pronunciamientos a que se refiere el artículo 46 de la Ley 16/89 de Defensa de la Competencia.

Teniendo en cuenta también todo lo expresado en los AH, se trata de resolver ahora si entre el 14 de junio de 1997 y el 20 de abril de 1999 en que se solicitó autorización singular, Mapecor transgredió el art. 1 de la LDC por acordar e implantar un Sistema informático de facturación y cobro en el mercado de pescado de Mercacórdoba que traía aparejada la imposición de condiciones comerciales homogéneas a los minoristas del citado mercado.

Todo el entramado de operadores que actúan en los mercados centrales de abastecimiento en las grandes ciudades presta un servicio esencial a los ciudadanos ya que la correcta comercialización de los productos perecederos incide en todos ellos de manera cotidiana. Desde el punto de vista de la competencia, la conveniente concentración de ofertas y demandas en un mismo lugar por razones de mejor control sanitario, trae como consecuencia un mayor número y riqueza de la variedad entre operadores ofertantes y demandantes que puede implicar una mayor flexibilidad y transparencia en los distintos mercados de los productos allí comercializados. Prácticamente los mismos ofertantes y demandantes, mayoristas y minoristas profesionales, negocian diariamente en los mercados centrales los precios y cantidades de esos productos perecederos que abastecen los núcleos poblacionales. Todo intercambio comercial es un proceso de información donde los agentes ponen de manifiesto sus preferencias y valores respecto a los bienes y servicios intercambiados y también respecto a la capacidad del pagador para atender sus compromisos. Los mercados, con su juego de ofertas y demandas distintas que se van armonizando merced a la libre competencia, actúan con claridad, eficacia y transparencia cuando se cumplen los requisitos y normas establecidas, especialmente, en la LDC. Este efecto regulador y ordenador es vital para la correcta actuación concurrencial en tanto en cuanto la propiedad y responsabilidad son haces de derechos que la legislación establece y que los operadores económicos deben respetar.

En este sentido se debe recordar que en el art. 1 de la LDC se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por

objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, entre otros, en particular, los que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

Además, en múltiples Resoluciones, el Tribunal ha manifestado reiteradamente que sistemas informáticos parecidos que implican de una u otra forma la constitución y gestión de registros de morosidad, suponen una forma de concertación entre empresarios que debe considerarse comprendida entre las conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC y que, por lo tanto, se exigen una serie de requisitos y condiciones para que, salvaguardando las ventajas, no se incurra en los efectos perniciosos para la competencia.

A su vez, también el Tribunal ha expresado que el hecho de que cumplan una función de saneamiento, transparencia y clarificación en el tráfico mercantil que contribuye a la mejora de la comercialización de bienes y servicios da lugar a que puedan ser objeto de autorización o exención siempre que las normas reguladoras de dichos sistemas aseguren condiciones tales como la voluntariedad de la adhesión al registro por parte de los usuarios, la libertad de los adheridos para fijar su política comercial frente al deudor moroso, la objetividad de la información que se transmite a los usuarios, el acceso de los deudores al registro para conocer los datos que les afecten, o que los datos incluidos en el sistema no se manipulen ni utilicen para fines distintos de los autorizados como propios del mismo.

Efectivamente, tal y como también señala la denunciada en este caso, la implantación de un sistema informático de gestión de la facturación y cobro no es, en sí mismo, algo capaz de afectar a la competencia, más bien la puede mejorar en cuanto que aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia y transparencia de las operaciones contractuales. Así lo reconoce ya el Servicio en el Informe Propuesta cuando señala *que “el establecimiento de un Sistema informático centralizado de facturación y cobro en el mercado de pescado de Mercacórdoba, en sí, no es restrictivo de la competencia y puede reportar grandes beneficios al funcionamiento general de dicho mercado.”* Sólo afectaría negativamente a la competencia si no se tuviese libertad para adherirse a no al sistema y si no quedase claro que

la política comercial respecto a los impagados o los morosos es autónoma e independiente entre los distintos operadores.

El Tribunal considera que, en el presente caso, el Sistema Informático de Facturación y Cobro del Mercado de Pescados en Mercacórdoba, en su inicial implantación hasta la petición formal de autorización singular, es consecuencia de un acuerdo adoptado por los mayoristas asociados a Mapecor que implica la fijación de condiciones comerciales en varios aspectos que produjo y que, desde luego, pudo producir, impedimentos a la libre negociación y contratación entre los distintos operadores, homogeneizando conductas o creando incentivos para que ese comportamiento similar respecto a determinados operadores pudiera producirse.

Tal y como también indicaba el Servicio, el establecimiento del sistema informático requiere de unas pautas a seguir en las transacciones entre mayorista y minorista, pero dichas pautas deben ser susceptibles de modificación en virtud de la negociación entre ambos. Tampoco quedaba clara al principio la flexibilidad en la negociación referente a los límites de crédito y tanto la exigencia de fianza o aval, como la negativa de venta a los morosos o el pago de facturas por orden de antigüedad, limitaban la autonomía de cada comerciante para negociar libremente sus condiciones comerciales. Existía un cierto acuerdo de negativa de venta a morosos así como de limitación de crédito que sólo podía desbloquearse en determinadas condiciones. A su vez, dicho Sistema implicaba un acuerdo de intercambio de información entre competidores, referida a morosidad y, lo que es más significativo, referida a volumen de ventas de cada mayorista a cada uno de sus compradores, con objeto de fijar el crédito disponible de cada uno de ellos.

No cabe duda, por lo tanto, de que el acuerdo inicial de la Asociación de mayoristas de pescado de Córdoba de fecha 23 de septiembre de 1995 podía afectar negativamente a la competencia al tratar de implantar un sistema de facturación y gestión de cobro para el que no se había pedido autorización singular y que entonces no cumplía los requisitos necesarios para ser autorizado.

Sin embargo, el Tribunal también quiere indicar que suele ocurrir, como parece haber ocurrido en este caso, que, al principio, llevar

a la práctica procesos innovadores en distintos ámbitos produce reticencias y desconciertos entre los operadores acostumbrados a la dinámica anterior. Este tipo de malentendidos se suelen producir en los comienzos de todo cambio significativo en los sistemas y normas que afectan a la facturación y al sistema de cobros y pagos. Así ha ocurrido en otros sectores y así ha ocurrido también en otros mercados más pioneros en la implantación de estos nuevos sistemas. De hecho, en algunos, existen sistemas parecidos desde hace muchos años que funcionan perfectamente y han terminado siendo adoptados sin problemas significativos por los distintos mayoristas y minoristas que deciden acceder a ellos y que les da la posibilidad de sustanciar el pago eligiendo entre diversas alternativas que se les presentan. Ante el cambio de sistema sugerido y acordado por los mayoristas de pescado de Mercacórdoba parece lógico que la inercia de lo habitual durante tantos años respecto al sistema instrumental de facturación y cobro de las transacciones acordadas, provocara un cierto desconcierto entre los minoristas que, como se ha señalado anteriormente, negocian sus operaciones diariamente con los mayoristas también profesionales. Sin embargo, posteriormente, después de distintas adaptaciones, negociaciones y mejoras no hubo ya quejas ni de minoristas ni de mayoristas. Antes de llevarlo a la práctica en su inicial concepción, y consecuencia en parte de la denuncia y de la actuación del Servicio, el sistema se ha ido perfeccionando, incorporando los criterios que habitualmente exige el Tribunal para los registros de este tipo en los que también incide la morosidad.

Por todo ello, el Tribunal, considera que se produjo, hasta la petición de autorización singular, una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el art. 1 a) de la LDC, de la que es responsable Mapecor, consistente en la implantación de un Sistema informático de facturación y cobro, en el mercado de pescado de Mercacórdoba que traía aparejada la imposición de condiciones comerciales homogéneas a los minoristas del citado mercado y que se debe intimar a la citada Asociación para que en lo sucesivo se abstenga de realizar tales prácticas.

En lo que se refiere a la posible imputación de multa, teniendo en consideración todas las circunstancias señaladas anteriormente y que para fijar la cuantía de las sanciones, indicaba también el Servicio: que la dimensión del mercado afectado era el de la

distribución mayorista de pescado en Mercacórdoba, que las cifras de venta no se vieron afectadas negativamente; que la implantación del Sistema en determinadas condiciones puede favorecer el funcionamiento del mercado de pescado; que, en cuanto a la duración de la conducta, como se ha visto a lo largo del expediente, el Sistema no llegó a implantarse, en su totalidad, en las condiciones en que había sido acordado; que debía tenerse en cuenta que el Sistema, tras su implantación, fue notificado con objeto de su autorización por este Tribunal; que a lo largo de la dilatada tramitación del expediente no hicieron más alegaciones los denunciantes, ni presentaron pruebas que lo aportado en la denuncia inicial y que, por último, como el art. 10 de la LDC referente a las multas sancionadoras, señala que el Tribunal podrá imponer tales sanciones económicas a las asociaciones que *deliberadamente* o *por negligencia* infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 o 7, en este caso considera que no se debe imponer ninguna multa sancionadora al no apreciar tampoco la existencia de esa deliberación o negligencia en la conducta.

Tercero.- En lo que respecta a la solicitud de autorización singular por parte de Mapecor para el sistema informático para la gestión de la de facturación y cobro de las ventas realizadas en el mercado de pescados de Mercacórdoba, cabe señalar en primer lugar que el Servicio la ha informado favorablemente aunque señalando algunas mejoras que debían ser incorporadas. Así, en su Informe dice a este respecto que dicho sistema es susceptible de autorización al amparo del art.3 de la LDC, siempre que cumpla determinados requisitos, y que dichos requisitos queden expresamente recogidos en las normas de funcionamiento del mismo. Tales requisitos son los siguientes:

- Que el intercambio de información esté referido únicamente a morosidad y que cumpla los requisitos exigidos por el TDC para los registros de morosos: a) la voluntariedad de la adhesión al registro por parte de sus usuarios; b) la libertad de los asociados para fijar su política comercial frente al moroso; c) la objetividad de la información que se transmite a los usuarios; d) el acceso de los interesados al registro para conocer, y en su caso combatir, los datos que les afecten; e) que los datos incluidos en el registro no se manipulen ni utilicen para fines distintos de los autorizados como propios del mismo; f) que la responsabilidad de la gestión del registro quede claramente delimitada en el reglamento.

- Que se suprima expresamente la exigencia de fianza o aval; el pago de facturas por orden de antigüedad y la negativa de venta a los morosos, ya que estas son condiciones que deberán negociar cada mayorista.

- En cuanto a los límites de crédito debe establecerse un sistema flexible que no implique el intercambio de información sobre volumen de ventas. En ese sentido, parece correcto el sistema que según el escrito de alegaciones se ha seguido en la práctica “cada detallista se puede adscribir a una de las opciones crediticias que el mismo disponga. ...” (folio 370)

La solicitud se formulaba en términos del solicitante con “carácter cautelar” por considerar que las conductas tipificadas en el Pliego de Concreción de Hechos como contrarias al art. 1 de la LDC – plazos de pago de las facturas; límites de crédito para los minoristas; exigencias de fianza o aval; negativa de venta a los morosos; pago de facturas por orden de antigüedad; intercambio de información sobre morosidad entre competidores; intercambio de información entre competidores referida a volumen de ventas con objeto de fijar los límites de crédito– no se consideraban por los solicitantes, contrarias al derecho de defensa de la competencia, sino como una forma por parte de los mayoristas de ejercer todos los derechos a su alcance.

El Tribunal considera, coincidiendo en ello con el Servicio, que el establecimiento de un sistema informático centralizado de facturación y cobro en el mercado de pescado de Mercacordoba, en sí, no es restrictivo de la competencia y puede reportar grandes beneficios al funcionamiento general de dicho mercado, pero la articulación del mismo no es neutra y, en el presente caso, como se ha explicado en el FD anterior, ha implicado prácticas tipificadas en el art.1 de la LDC como restrictivas de la competencia.

Sin embargo, las normas reguladoras del sistema de facturación y cobro informático se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo y fruto también de la consideración de los aspectos a tener en cuenta desde la defensa de la competencia con la intervención del Servicio y de la experiencia que ya se tiene en estas cuestiones en relación con los registros de morosos.

Así, durante la fase de tramitación ante el Tribunal, Mapecor aportó unas Normas de funcionamiento del sistema que cumplieran lo sugerido por el Servicio. Por señalar algunos aspectos, se han clarificado las siguientes normas de funcionamiento:

1. Plazos de pago: si un mayorista decide vender a un minorista "moroso", puede solicitar al responsable informático que realice las operaciones precisas para que el sistema permita dicha venta.
2. Pago de facturas por orden de antigüedad: el sistema permite que el minorista pague aquellas facturas pendientes que desee; en caso de que no manifieste nada en este sentido, el sistema, por defecto, entenderá pagada la más antigua.
3. Límite de crédito: se mantienen los mismos límites de crédito existentes (250.000, 500.000 y 1.000.000 de pesetas), pero el sistema permite que se puedan establecer otros distintos y que, a petición de cualquier mayorista, los límites se puedan modificar para que los mayoristas que lo deseen puedan vender a los minoristas que hayan rebasado su límite.
4. Información a la que tienen acceso los mayoristas: se mantiene la misma información que el sistema ha proporcionado hasta la fecha, información que, en ningún caso, incluye a quién ni cuánto debe un minorista al resto de mayoristas ni el volumen de compras que el minorista realiza.

En consecuencia, el Tribunal considera que las normas reguladoras del funcionamiento del Sistema que presentan de nuevo ante el Tribunal incorporando las modificaciones señaladas por el Servicio, son aceptables en lo que se refiere al respeto de los criterios que la doctrina reiterada entiende que deben ser cumplidos para poder ser autorizados y que hacen posible aprovecharse de las ventajas sin caer en los posibles inconvenientes que este tipo de sistemas de facturación y cobro pueden ocasionar para el desarrollo dinámico de una competencia suficiente y efectiva en los mercados en los que se implantan.

Por todo lo anterior **VISTOS** los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, el Tribunal de Defensa de la Competencia,

HA RESUELTO

Primero. Declarar acreditada una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el art. 1 de la Ley 16/89, de Defensa de la Competencia, consistente en la implantación en el mercado de pescado de Mercacórdoba de un Sistema informático de facturación y cobro, que daba lugar, de hecho, a la imposición de condiciones comerciales homogéneas a los minoristas del citado mercado.

Es responsable de dicha práctica restrictiva de la competencia, en concepto de autora, la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor)

Segundo. Intimar a la citada Asociación para que se abstenga de realizar la citada conducta en el futuro.

Tercero. Ordenar la publicación, en el plazo de dos meses, de la parte dispositiva de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la Sección de Economía de dos de los diarios de mayor circulación en Córdoba, a su costa

Cuarto. Autorizar el sistema informático para la gestión de la facturación y cobro en Mercacórdoba, solicitado por la Asociación de Mayoristas de Pescado de Córdoba (Mapecor), que se regirá por el reglamento aportado por la solicitante e incorporado a los folios 48 a 51 del expediente seguido ante este Tribunal.

Quinto. Establecer una duración de cinco años para la autorización, a contar desde la fecha de esta Resolución y sujeta a las circunstancias que establece el artículo 4º de la Ley de Defensa de la Competencia.

Sexto. Encargar al Servicio de Defensa de la Competencia, con remisión de copia compulsada de las normas de funcionamiento del sistema informático para la gestión de la facturación y cobro

de las ventas realizadas en el mercado de pescados de Mercacórdoba que se autoriza, que vigile la ejecución y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y que proceda a la inscripción del reglamento autorizado en el Registro de Defensa de la Competencia.

Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que agota la vía administrativa y que sólo es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.